



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

## ORIGINAL TOMO XLII

FONDO FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS  
ÁREA RESPONSABLE FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA  
RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES \_\_\_\_\_  
CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN AVERIGUACIÓN PREVIA  
CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE \_\_\_\_\_  
CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIONAL) \_\_\_\_\_  
CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE AP/FGR/FEMDH/FEIDDF/M26/002/2019

### ACCESO

PUBLICO	SI	NO	<u>X</u>
INFORMACIÓN RESERVADA	SI	<u>X</u>	NO
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	SI	<u>X</u>	NO
RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA	SI	<u>X</u>	NO

### RESUMEN DEL CONTENIDO

DENUNCIANTE:

INCUPLADO: QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES

DELITO: PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y EL QUE RESULTE

Triplificado abierto de la primigenia AP/PGR/SDHPDSC/FEBPD/M26/210/2016

### FECHAS EXTREMAS

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE 2019

### FORMATO O SOPORTE

PAPEL X FOTOGRAFÍAS \_\_\_\_\_ LIBROS \_\_\_\_\_ DISQUETES \_\_\_\_\_ CD ROM \_\_\_\_\_ ENGARGOLADO \_\_\_\_\_  
VIDEO \_\_\_\_\_ OTRO (S) \_\_\_\_\_ DESCRIBIR \_\_\_\_\_

### VALOR DOCUMENTAL

ADMINISTRATIVO	_____
LEGAL	<u>X</u>
CONTABLE	_____

### PLAZO DE CONSERVACIÓN

VIGENCIA COMPLETA	<u>12</u> AÑOS
ARCHIVO DE TRÁMITE	_____ AÑOS
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	<u>12</u> AÑOS

### CARÁCTER FUNCIONAL

TÉCNICO SUSTANTIVO	<u>X</u>
DE GESTIÓN INTERNA	_____

### CONFORMACIÓN

NÚMERO DE LEGAJOS	_____
NÚMERO DE FOJAS	_____





ACUERDO DE CONSIGNACIÓN

**DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL**

[REDACTED]

los Delitos de Desaparición Forzada, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final firman y dan fe. -----

----- **A C O R D O** -----

- **VISTAS** las constancias que integran la averiguación previa **AP/PGR/SDHPDSC/FEBPD/M26/210/2016**, y en virtud de encontrarse reunidos los extremos del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2º, 134, 136, 142, 168 y 195, del Código Federal de Procedimientos Penales, es procedente ejercer acción penal **SIN DETENIDO**,

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

Por su probable responsabilidad Penal en la comisión de los delitos de:

- A) **DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS** previsto en el artículo 27 de la **Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas**, conducta atribuida a título de **ACCIÓN DOLOSA** (Artículos 8 y 9 del Código Penal Federal), siendo su consumación **PERMANENTE O CONTINUA** (Artículo 13 Ley General de Desaparición Forzada) y en calidad de **COAUTORES MATERIALES** (Artículo 13 fracción III del Código Penal Federal), bajo la **AGRAVANTE** consistente en que la **PERSONA HAYA SIDO DESAPARECIDA POR SU ACTIVIDAD COMO DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS** (Artículo 32 de la propia Ley General, fracción V.) y, sancionado en los artículos 30 y 32 de La Ley General de la Materia.
- [REDACTED]

- B) **DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS** previsto en el artículo 28 de la **Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición**





**Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas**, conducta atribuida a título de **COMISIÓN POR OMISIÓN** (Artículos 8 y 9 del Código Penal Federal), siendo su consumación **PERMANENTE O CONTINUA** (Artículo 13 Ley General de Desaparición Forzada) y en calidad de **AUTOR MATERIAL** (Artículo 13 fracción II del Código Penal Federal), correlacionado al artículo 29 de la Ley General de Desaparición Forzada, bajo la **AGRAVANTE** consistente en que la **PERSONA HAYA SIDO DESAPARECIDA POR SU ACTIVIDAD COMO DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS** (Artículo 32 de la propia Ley General, fracción V.) y, sancionado en los artículos 30 y 32 de La Ley General de la Materia.

Hipótesis aplicable para [REDACTED]

**C) DELINCUENCIA ORGANIZADA CON LA FINALIDAD DE COMETER DELITOS EN MATERIA CONTRA LA SALUD**, previsto en el artículo 2, fracción I, y sancionado en el ordinal 4, fracción II, inciso a) (con funciones de [REDACTED])

Delincuencia Organizada, en relación con los artículos 7, fracción II (hipótesis de delito permanente) 8, (hipótesis de acción dolosa) 9, párrafo primero (hipótesis de conocer y querer) 13 fracción II (hipótesis: los que lo realicen por sí) todos del Código Penal Federal.

Se concluye lo anterior ya que los hechos investigados se adecúan a la descripción legal que hace el legislador en los ordenamientos legales precitados y que para mayor ilustración se citan a continuación:

#### **DESAPARICIÓN FORZADA:**

Delito de **DESAPARICIÓN FORZADA** previsto en el artículo 27 y 28 de la **Ley General en Materia De Desaparición Forzada De Personas, Desaparición Cometida Por Particulares**; que a continuación se transcribe:

*"Artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.*

*"Artículo 28. Al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30."*

#### **DELINCUENCIA ORGANIZADA:**

*"Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:*





- I. ...; contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, párrafo primero y 196 Ter...";

**"Artículo 4o.-** Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes:

- I. En los casos de los delitos contra la salud; (...):

a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la delincuencia organizada, de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, o

b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa."

El hecho delictivo que se investigó y que se acreditará en el cuerpo del delito es: La Desaparición Forzada de dos activistas de derechos humanos EDMUNDO REYES AMAYA y/o ANDRÉS REYES AMAYA y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ Y/O RAYMUNDO RIVERA BRAVO, ya que la concatenación lógica de los medios de convicción que serán analizados más adelante, ponen de manifiesto que por la tarde del 24 de mayo de 2007, las víctimas Edmundo Reyes Amaya y/o Andres Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sanchez y/o Raymundo Rivera Bravo fueron privados de la libertad entre las 16:00 y 18:00 horas aproximadamente en las inmediaciones del Hotel "Del Árbol" ubicado en Calzada Francisco I. Madero número 131, Santa María del Marquesado, Colonia Centro de Oaxaca, y llevados posteriormente al área de separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, ubicada en Calle Luis Echeverría Alvarez # 1, Colonia La Experimental, Municipio San Antonio de la Cal, Oaxaca, esto al ser aproximadamente las 00:00 del día 25 de mayo de 2007, lo que quedó de manifiesto con las declaraciones de Rosa Elba Velázquez Gonzalez, Lucila Alicia Ramirez Hernandez, Segismundo Rafael Lorenzo Garcia, el testigo de identidad reservada "Luna" y el testigo protegido con clave "Paco", quienes constataron a

elementos mas que no han sido identificados del grupo FPAR perteneciente a la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, y que el ingreso a los separos les fue negado por parte del Comandante de Guardia Jonás Efigenio Gutierrez Corro, derivado de que no llevaban orden judicial o ministerial para su retención y que incluso se encontraban golpeados, retirándose el personal ministerial con las víctimas con rumbo desconocido a bordo de vehículos del grupo FPAR, lo que se hizo constar en los libros de gobierno de detenidos y novedades y fue más tarde cuando al ser aproximadamente las 02:00 horas del 25 de mayo de 2007 cuando fueron vistas las víctimas en el anfiteatro de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca sin vida en una de sus planchas, según lo constato el médico legista Alberto Carrasco Velázquez quien informo que ambos cadáveres posteriormente fueron trasladados sin saber a donde en una ambulancia del anfiteatro





conducida por un Policía Ministerial al ser aproximadamente las 03:30 horas del 25 de mayo de 2007, y que incluso cuando tuvo a la vista ambos cadáveres dicho lugar fue cerrado y en el interior se encontraban varios funcionarios públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, incluyendo al Procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, desconociendo hasta este momento su paradero ya que no fueron puestos a disposición de ninguna autoridad. Posterior a ello, la autoridad negó participar en la privación de la libertad de las víctimas y oculto información sobre su suerte o paradero. Asimismo, se evidencio que el personal que participo en el hecho criminal, mantenía vínculos con el grupo delictivo denominado "Z", con quienes colaboraban y permitían realizar actos delictivos, donde incluso eran apoyados por personal de la autoridad señalada como responsable.

Asimismo los hechos investigados del delito de Delincuencia Organizada se dan a la par que el delito de Desaparición Forzada ya que desde el año 2001 al 2009 la organización criminal de los Zetas, estuvieron realizando labores delictivas en el Estado de Oaxaca, principalmente en la ciudad de Oaxaca y el Tlaxiaco de Tehuantepec. En donde se creó un grupo de Policías tanto Ministeriales, que apoyaban la labor criminal de los Zetas, los cuales como se verá en el cuerpo del presente acuerdo, éstos son parte integrante de la Policía Ministerial del estado de Oaxaca e integrantes del grupo especial denominado FPAR (FUERZA POLICIAL DE ALTO RENDIMIENTO). Cabe aclarar que se mantiene la disciplina y jerarquías dentro de este grupo Policial y quienes son los jefes de este grupo, como el Procurador General de Justicia de esa época en el estado de Oaxaca y el Titular de la Policía Ministerial del estado en la misma época, específicamente entre los años 2005 a 2009. Las labores criminales que realizaban dicho grupo policial para apoyar y dejar laborar libremente los ZETAS en el estado de Oaxaca eran a fin de dejarlos que cobraran derecho de piso y dándoles a conocer a los ZETAS todas las narco tienditas que tenían identificadas, así como darles a conocer a los posibles rivales en la venta y tráfico de estupefacientes y droga en la zona centro del Estado y el Tlaxiaco, así como dejarlos pasar por los retenes sin revisión, proporcionándoles charolas e identificaciones de policías falsas. Dejándoles el paso libre en las zonas de comercio y las de tolerancia o zonas rojas.

### RESULTANDO:

**PRIMERO.** La averiguación previa **AP/PGR/SDHPDSC/FEBPD/M26/210/2016**, se inició con la recepción del oficio número FEBPD/024369/2016, signado por el Licenciado Juan Carlos Chávez Jiménez, Director General de esta Fiscalía, quien remite la averiguación previa número **PGR/SIEDO/UEITA/047/2008 y su acumulada PGR/SIEDO/UEIS/208/2008**, misma que fue enviada a esta Fiscalía mediante oficio y acuerdo de incompetencia, signados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en

Delincuencia Organizada, Secuestro y Desaparición Forzada previstos y sancionados en los artículos 2º, fracciones I, y V, de la Ley Federal contra la





Delincuencia Organizada, 366 y 364 todos del Código Penal Federal (vigentes en la época de los hechos).

Esta indagatoria fue consignada el 05 de agosto del 2019 ante el Juzgado Séptimo de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, y el 6 de agosto del 2019, mediante aviso de inicio del Juzgado se inició la causa penal 51/2019, y mediante oficio 6435 se notifica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado que se devuelve el expediente por formalidades de acuerdo al artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, Por lo que se hace el reingreso del expediente el día 07 de agosto del 2019, para subsanar dichas formalidades.

Mediante acuerdo de fecha 28 de agosto del 2019, se hace constar que fueron subsanadas las observaciones realizadas por el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales. En el entendido que algunas de ellas como algunas firmas de personal de dependencias de esa época, fue imposible subsanarlas en razón de que las personas dejaron de laborar hace muchos años en esa dependencia pública o fallecieron, sin embargo, cabe resaltar que las mismas no fueron tomadas en consideración en las pruebas listadas en el presente acuerdo para acreditar el Cuerpo del Delito y/o la Probable responsabilidad de los imputados.

**La indagatoria de origen (PGR/SIEDO/UEITA/047/2008) fue iniciada el 24 veinticuatro de abril del año 2008 de manera oficiosa,** por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Terrorismo y Tráfico de Armas (nombre de esa época de la Unidad), **por la desaparición de los activistas y miembros del EPR, EDMUNDO REYES AMAYA Y/O ANDRÉS REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ Y/O RAYMUNDO RIVERA BRAVO,** derivado de información que hacia latente su desaparición, dentó de la que se encuentra: 1. Nota periodística Titulada "Exige el EPR la liberación de los detenidos de los desaparecidos, de fecha 11 de julio del año dos mil siete del periódico "La Jornada"; 2. Notas periodísticas tituladas "YA ES SUFICIENTE CON DESAPARICIONES" y "A quien reclaman la Guerrilla" (Sic) de fecha 11 de julio del dos mil siete, del periódico Reforma; 3. Comunicado del PDPR- EPR de fecha 10 de julio del 2007; 4. Constancia de identificación y localización de páginas en internet relacionadas con los hechos que se investigan, de fecha dieciséis de julio del dos mil siete; 5. Declaración ministerial del testigo protegido con nombre clave "Luna" de las 16:05 horas del día 14 catorce de noviembre del dos mil siete; 6. Copia certificada de la declaración de [REDACTED] del día veintidós de febrero del dos mil ocho; 7. Oficio de localización y presentación en contra [REDACTED] certificada de la declaración de [REDACTED] horas del día veintiuno de abril del dos mil ocho; 9. Copia certificada de la declaración de [REDACTED] 13:05 horas del día veintiuno de abril del dos mil ocho; 10. Copia certificada de la declaración de LUIS DIAZ PANTOJA de las 15:22 horas del día veintidós de abril del dos mil ocho; 11. Copia certificada de la declaración de [REDACTED] del 23 de abril del dos mil ochos; 12. Copia certificada de la declaración de EUGENIO JESÚS DÍAZ PARADA de las 18:00 horas del día veintitrés de abril del dos mil ocho; 13. Copia certificada de la declaración de [REDACTED] las 20:46 horas del día veintitrés de abril del dos mil ocho.





A la averiguación previa primigenia **PGR/SIEDO/UEITA/047/2008**, le fue acumulada y glosada la diversa **PGR/SIEDO/UEIS/208/2008**, iniciada con fecha del **03 de agosto del año 2007** por los delitos de **Secuestro y Delincuencia Organizada**, en agravio de **EDMUNDO REYES AMAYA y/o ANDRES REYES AMAYA y RAYMUNDO RIVERA BRAVO y/o GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ** y en contra de **QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES**, por estar estrechamente relacionadas con la desaparición de las víctimas ya citadas, delitos considerados como graves regulados y sancionados por la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

**SEGUNDO.-** Una vez que se han practicado diversas diligencias, la Representación Social de la Federación, considera que se cuenta con elementos para proceder a ejercer acción penal en contra de los imputados de merito por los delitos de **DELINCUENCIA ORGANIZADA y DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS**, como a continuación se expone:

----- **COMPETENCIA** -----

**PRIMERO.** Al Ministerio Público de la Federación le compete el ejercicio de la acción penal de acuerdo a los artículos 16, párrafo segundo 21, 73, fracción XII (jurisdicción federal) y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 2º fracción VI (Ejercicio de la Acción Penal), 6º párrafo primero, 134, 136, fracciones I y II, 194, fracciones I, 12), II, y 195 del Código Federal de Procedimientos Penales; 24 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; 4, 5 fracciones I, II y III, 9 Fracciones I, II, III, V, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y 50 fracción I y IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de delitos federales de competencia concurrente, así como los acuerdos 21/2008, 82/2008, 18/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, en donde dotan de competencia a los Juzgados de Distrito distintos al lugar donde se cometió el delito.

Primeramente, debe precisarse que el Artículo 2 de la Ley General de la Materia (Desaparición Forzada) establece la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a fin de esclarecer los hechos relacionados a los delitos de Desaparición Forzada.

Asimismo, el Artículo 24 de la Ley de la Materia señala, que la investigación corresponderá a las autoridades federales cuando:

- I.** Se encuentre involucrado algún servidor público federal como probable responsable, o como sujeto pasivo de los delitos previstos en esta Ley.
- II.** Se actualicen las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal Federal, o en cualquier otra disposición que le otorgue competencia a la Federación.
- III.** Exista una sentencia decisión de algún organismo internacional de protección de los derechos humanos o una resolución de un órgano previsto en cualquier Tratado Internacional en la que se determine la responsabilidad u obligación del Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de los delitos previstos en esta Ley.
- IV.** El Ministerio Público de la Federación solicite a la Fiscalía Especial de la Entidad Federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo.





- V. ***Durante la investigación se encuentren indicios que en la comisión del hecho participo una persona cuya pertenencia o colaboración con la delincuencia organizada esté acreditada. [...]***"

Ahora bien, se suma a lo anterior, lo establecido en el ordinal 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se establecen las hipótesis por las cuales tendrán competencia para conocer el Órgano Jurisdiccional Federal:

[...] **Artículo 50.** Los jueces federales penales conocerán:

I. De los delitos del orden federal.

Son delitos del orden federal:

- a) **Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se refieren los incisos b) a l) de esta fracción;**
- b) Los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal;
- c) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos;
- d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras;
- e) Aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo;
- f) Los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;
- g) Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, así como los cometidos contra el Presidente de la República, los secretarios del despacho, el Procurador General de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, los miembros de Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los directores o miembros de las Juntas de Gobierno o sus equivalentes de los organismos descentralizados;
- h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado;
- i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado;
- j) Todos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación;
- k) Los señalados en el artículo 389 del Código Penal cuando se prometa o se proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o empresa de participación estatal del Gobierno Federal;
- l) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401 del Código Penal; y
- m) Los previstos en los artículos 366, fracción III; 366 ter y 366 quáter del Código Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o entregar al menor fuera del territorio nacional.
- II. De los procedimientos de extradición, salvo lo que se disponga en los tratados internacionales.
- III. De las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada.
- IV. **De los delitos del fuero común respecto de los cuales el Ministerio Público de la Federación hubiere ejercido la facultad de atracción.**

Tomando en consideración los ordinales precitados, se evidencia la competencia de esta autoridad federal para conocer, investigar y ejercitar la acción penal





intentada, ya que esta investigación fue iniciada de Oficio por un órgano persecutor de delitos Federal en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la época de los hechos, por la relevancia social de dicho acontecimiento en la vida pública del país en ese momento, como se verá en el análisis de contexto del mismo, atendiendo a las características propias del hecho y las circunstancias de ejecución donde tuvieron intervención servidores públicos de alto nivel relacionados a la procuración de justicia, quienes lógicamente no podrían investigarse a ellos mismos.

Además de tratarse de **Delitos** considerados **Graves** así contemplados en el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional, previstos por la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en su hipótesis de contra la salud, ya que algunos de ellos pertenecieron al **cártel de los ZETAS o LA ULTIMA LETRA**, así como en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Por lo anterior, esta autoridad federal tiene competencia para acudir al órgano jurisdiccional federal a ejercer acción penal en contra de los indicados por los delitos precitados.

**Por existir antecedente de la causa penal 51/2019-I del 6 de agosto del 2019, en la que se consignó esta indagatoria al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco., siendo regresada por el artículo 142 del Código federal de Procedimientos Penales. Formalidades que se encuentran subsanadas.**

**SEGUNDO.** Ahora bien, esta Autoridad considera oportuno que un Órgano Jurisdiccional distinto al que ocurrieron los hechos conozca del presente pliego de consignación, pues se colman los requisitos de competencia excepcional a favor de Juez de Distrito ante el cual, se ejercita acción penal, en base a lo siguiente:

Surge la competencia de un Juez de Distrito distinto del lugar en donde ocurrieron los hechos criminosos, en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 10 en relación con el 6 del Código Federal de Procedimientos Penales, los cuales establecen lo siguiente:

**"ART. 6.- Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 10. Si el delito produce efectos en dos o más entidades federativas, será competente el juez de cualquiera de éstas o el que se hubiera prevenido".**

**"ART. 10.- Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes, cualquiera de los tribunales cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o hayan realizado actos constitutivos de tales delitos.**

**En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.**

**También será competente para conocer de un asunto, un Juez de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público Federal considera necesario llevar**





*el ejercicio de la acción penal ante otro juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubica dicho centro..."*

De lo anterior, se desprende que para trasladar la competencia a un Juez de Distrito distinto del lugar en donde se cometieron los hechos delictuosos, que en el presente caso se trata de un delito como los de **Delincuencia Organizada** y el de **Desaparición Forzada** los cuales en su forma de consumación son permanentes y continuos, hasta que cesen sus efectos y en el caso de desaparición forzada, hasta que aparezca la víctima con vida o sus restos sean localizados y plenamente identificados, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley General de la Materia (Desaparición Forzada), además de que se deben actualizar los supuestos siguientes: **a) seguridad en las prisiones; b) características del hecho imputado; c) circunstancias personales del inculpado; y d) otras que impidan garantizar el desarrollo del proceso.** Apoyando lo anterior, se encuentra el **criterio jurisprudencial** identificado **P./J. 48/2004**, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, julio de 2004, Novena Época, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente:

**26 DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE NATURALEZA PERMANENTE O CONTINUA.** El referido delito que contempla el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro (coincidente con lo previsto en los artículos 215-A del Código Penal Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal), de acuerdo con el derecho positivo mexicano, **es de naturaleza permanente o continua**, ya que si bien el ilícito se consuma cuando el sujeto activo priva de la libertad a una o más personas, con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información sobre su paradero, dicha consumación sigue dándose y actualizándose hasta que aparecen los sujetos pasivos o se establece cuál fue su destino.

Resulta también aplicable el **criterio jurisprudencial** con registro **2008976**, sustentado por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito que al rubro señala:

**DELINCUENCIA ORGANIZADA. TRATÁNDOSE DE ESTE DELITO DE NATURALEZA PERMANENTE LA UBICACIÓN DEL ACTO DELICTIVO EN CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE EXIGE EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SE SATISFACE MOTIVANDO LA TEMPORALIDAD DE LA PERTENENCIA DEL SUJETO ACTIVO A LA AGRUPACIÓN.** Para cumplir cabalmente con el artículo 19 constitucional, en cuanto a la exigencia de ubicación del acto delictivo en circunstancias de modo, tiempo y lugar, es evidente que debe atenderse a la naturaleza del delito de que se trata, y si bien es cierto que **tratándose de un delito permanente** o de tracto sucesivo, **como podría clasificarse el llamado "contra la delincuencia organizada"**, no habrá de buscarse una fecha exacta o lugar único de consumación, como puede esperarse en los instantáneos, ello no significa que la autoridad judicial esté exenta de dicha obligación, pues respecto de dichos ilícitos de naturaleza permanente, esas circunstancias deben destacarse resaltando la temporalidad y peculiaridad de cada uno de los actos que se estiman significativos para probar, en su caso, esa existencia y continuidad de ejercicio del comportamiento de efectos permanentes que constituyen el hecho reprochable. Así, tratándose del delito previsto en el artículo 20. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la exigencia constitucional en comento, debe satisfacerse motivadamente, señalando los actos concretos de intervención del indiciado de que se trate, conforme a las circunstancias espacio-temporales de verificación y dentro del ámbito de validez temporal de la ley respectiva y las pruebas en que tal afirmación se sustente; es decir, debe ubicarse la temporalidad de la pertenencia a la agrupación utilizando para ello la cita de los actos concretos de intervención conforme a los fines de la agrupación de las que sí se deben precisar suficientemente circunstancias espacio temporales, mas no porque fuesen dichos actos el objeto de reproche, sino como parámetro o referencia útil para constatar la pertenencia al grupo que es lo que





*verdaderamente constituye el núcleo típico del delito de que se trata.*

En tales condiciones, se colma el primero de los requisitos de competencia excepcional relacionado al inicio **a) seguridad en las prisiones**; se sostiene lo anterior derivado a que dentro de la indagatoria se demuestra que la mayoría de los indiciados que hoy se consignan fueron miembros de un órgano estatal de procuración de justicia, específicamente de la **Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, Policía Ministerial del Estado de Oaxaca**, así como un **grupo especial denominado FUERZA POLICIAL DE ALTO RENDIMIENTO con siglas (FPAR)**, "Acuerdo de la creación de la Fuerza Policial de Alto Rendimiento F.P.A.R., publicado en el Periódico Oficial del Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Con fecha 28 de junio de 1997, Oaxaca de Juárez, Oax., en el Reglamento de la Policía Judicial del Estado de Oaxaca", el cual de la investigación se desprende que fue creado desde el año de 1997, por decreto del **Gobierno del Estado de Oaxaca**, en el Diario Oficial Estatal de ese año, y dentro del decreto de creación, se establece como un grupo especial de reacción inmediata, dependía directamente del Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, recibiría órdenes directas de éste aun habiendo un Director General de la Policía Ministerial de ese Estado siendo que éste también dependía del señor Procurador. Por ello y teniendo en cuenta que dentro de los probables responsables del Delito de Desaparición Forzada se encuentra el **Procurador General de Justicia de ese Estado** (mayo del 2007, época de los hechos) y los demás son **también mandos de la Policía Ministerial** de ese tiempo y **agentes de la Policía Ministerial del Estado** adscritos en ese tiempo del 2007, al grupo ya citado con siglas (FPAR), **lógicamente dichos servidores públicos -en la fecha de los hechos- tenían intervención en múltiples investigaciones, participando de manera directa e indirecta, donde evidentemente pudieron colaborar en la detención de infractores de la ley penal, e incluso instruir esta acción de personas que pudieran encontrarse reclusas a la actualidad en el Centro de Justicia Penal Federal de Miahuatlán, Oaxaca, lo que conlleva un riesgo eminente para los indiciados el ser reclusos en el mismo, generando un conflicto dentro de sus instalaciones ya que de enterarse su población penitenciaria pondría en alto riesgo su integridad física**; ahora bien, al tratarse de servidores públicos activos e inactivos y por los cargos y funciones ejercidas, al tratarse de altos funcionarios, podría existir relación con las posteriores administraciones de procuración de justicia, trayendo como consecuencia un posible favorecimiento para los imputados. Por ello, con independencia de que en el lugar donde se suscitaron los hechos se cuente con un Centro Federal de Máxima Seguridad número 13 de Miahuatlán, Oaxaca, es necesario uno distinto, como lo es el ubicado en la Zapotlanejo, Jalisco, el cual cuenta con las características propias del Sistema de Seguridad requerido para la custodia de los hoy indiciados, pues es necesario que el Centro Federal donde se recluyan los imputados se encuentre alejado de la zona de influencia que tenían, garantizando con ello primeramente su seguridad e integridad física así como el debido desarrollo del proceso, por la cual, los sujetos contra los que hoy se ejercita acción penal, deberán ser enviados a dicho Centro, ya que representan un alto grado de riesgo y peligrosidad dentro del ámbito territorial en el cual desempeñaban funciones de procuración de justicia y donde estaban relacionados con el grupo criminal de los "Z", y derivado de haber sido y ser **servidores públicos y miembros de un ente de Procuración de Justicia del Estado de Oaxaca y de influencia dentro y fuera de ese Estado, pues hasta la**





fecha algunos se encuentran en activo, pudieran tener actualmente conocidos en el actual Gobierno del Estado de Oaxaca, trayendo como consecuencia un posible favorecimiento para los imputado, e incluso pudieran influir entre los testigos ya declarados y los posibles, pues cabe resaltar que posterior a este incidente un posible testigo de cargo para esta fiscalía y que era muy importante, quien fue **quien le negó la entrada a los separos al** [REDACTED] **on los desaparecidos fue** [REDACTED] **la guardia en el área de** [REDACTED] **separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca,** **desapareció unos meses después abriendo 2 averiguaciones previas en la** **Procuraduría General de Justicia de ese Estado una por privación ilegal de la** **libertad y otra por secuestro, que así lo avalan.**

**EN MATERIA DE**

**INVESTIGACIÓN**  
Asimismo, debe tomarse en consideración el inciso **b) características del hecho imputado**, los cuales recordemos se trata de delitos graves, donde en el particular respecto a la desaparición forzada de personas se evidencia que por la tarde del 24 de mayo de 2007, las víctimas Edmundo Reyes Amaya y/o Andres Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sanchez y/o Raymundo Rivera Bravo (pertenecientes al Ejército Popular Revolucionario y defensores de Derechos Humanos) fueron privados de la libertad entre las 16:00 y 18:00 horas aproximadamente en las inmediaciones del Hotel "Del Árbol" ubicado en Calzada Francisco I. Madero número 131, Santa María del Marquesado, Colonia Centro de Oaxaca, y llevados posteriormente al área de separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, ubicada en Calle Luis Echeverría Alvarez # 1, Colonia La Experimental, Municipio San Antonio de la Cal, Oaxaca, esto al ser aproximadamente las 00:00 del día 25 de mayo de 2007, lo que quedara de manifiesto con las declaraciones de Rosa Elba Velázquez Gonzalez, Lucila Alicia Ramirez Hernandez, Segismundo Rafael Lorenzo Garcia, el testigo de identidad reservada "Luna" y el testigo protegido con clave "Paco", quienes constataron a

[REDACTED]

*elementos mas que no han sido identificados del grupo FPAR perteneciente a la* Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, y que el ingreso a los separos les fue negado por parte del Comandante de Guardia Jonás Efigenio Gutierrez Corro, derivado de que no llevaban orden judicial o ministerial para su retención y que incluso se encontraban golpeados, retirándose el personal ministerial con las víctimas con rumbo desconocido, lo que se hizo constar en los libros de registro (que fueron desaparecidos y/u ocultados por la autoridad) y fue más tarde cuando al ser aproximadamente las 02:00 horas del 25 de mayo de 2007 cuando volvieron a ser vistas las víctimas en el anfiteatro de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca sin vida en una de sus planchas, según lo constato el médico legista Alberto Carrasco Velázquez quien informo que ambos cadáveres fueron trasladados sin saber a donde en una ambulancia del anfiteatro conducida por un Policía Ministerial al ser aproximadamente las 03:30 horas del 25 de mayo de 2007, y que incluso cuando tuvo a la vista ambos cadáveres dicho lugar fue cerrado y en el interior se encontraban varios funcionarios públicos de la

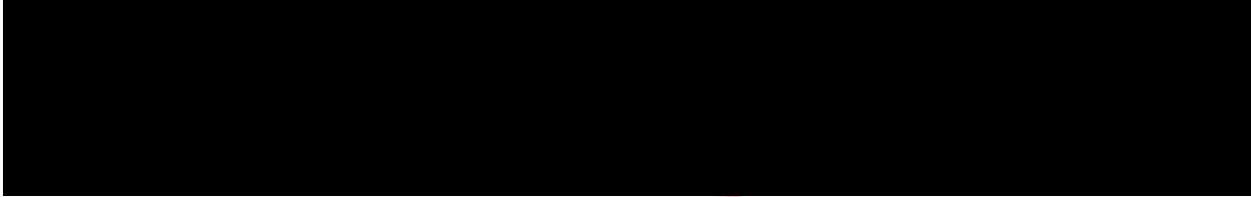




Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, incluyendo al Procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, y desde ese momento no se ha tenido mayor noticia de sus suerte o paradero.

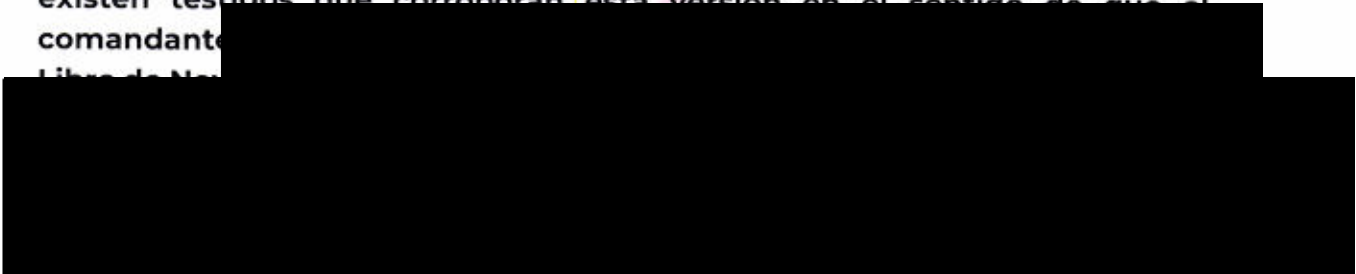
Dichas circunstancias denotan la participación activa de miembros de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, en la desaparición forzada de dos personas militantes del Ejército Popular Revolucionario y defensores de Derechos Humanos, lo que trajo como consecuencia diversos actos violentos por parte del EPR, exigiendo la entrega con vida de sus simpatizantes, lo cual quedo de manifiesto con los múltiples comunicados realizados por el EPR de los que se desprende como consecuencia de la detención- desaparición de los luchadores sociales (ahora víctimas) informaron al pueblo y a sus organizaciones que "...hemos iniciado una campaña nacional de hostigamiento a los intereses económicos de la oligarquía y de este gobierno antipopular, declarando objetivo militar todos los intereses de la oligarquía que impuso violentamente al gobierno ilegítimo de Calderón", lo que derivó en diversos atentados con explosivos a instalaciones de la compañía de Petróleos PEMEX, en los estados de Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala, tendiendo repercusiones tanto a nivel estatal como federal.

Asimismo, respecto del inciso **c) circunstancias personales de los inculpados**, debe tomarse en consideración **que de los activos del delito de desaparición forzada, algunos de ellos participaban activamente en los delitos de Delincuencia Organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud, lo cual se comprueba con la sentencia de la causa penal 9/2011, publicada el 6 de junio del dos mil dieciocho en la que se condenó a los inculpados**



Además de lo anterior, obra dentro de la indagatoria de la negativa del Gobierno del Estado de Oaxaca, tanto del Procurador como de Gobernador de que no habían participado agentes del estado de Oaxaca en tal desaparición, así como la pérdida de los libros de guardia del año 2007, específicamente los de novedades y los de detenidos. En donde los testigos Policías Ministeriales de guardia específicamente del día 24 para amanecer 25 de mayo del 2007, anotaron los nombres de los detenido o por lo menos los apellidos y en qué averiguación previa estaban ligadas sus conductas.

Existen también **declaraciones de un testigo con reserva de identidad con clave LUNA**, que era el Policía Ministerial de guardia en los separos y **que hizo la inscripción de los nombres de los detenidos en el Libro de los detenidos y existen testigos que corroboran esta versión en el sentido de que el comandante**



de la guardia a unos días de éste penoso incidente.

**Por otro lado, y no menos importantes, se cuenta con las declaraciones de**





dos **TESTIGOS COLABORADORES**, con clave **SALVADOR** (quien fue miembro activo durante casi 8 años del Ejército Popular Revolucionario), y quien conoció a ambos desaparecidos **CC. EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ**, como miembros de este organismo y que ambos habían sido miembros activos, sin embargo hace una distinción en entre ellos uno el primero, fue digamos un miembro de ideologización y el segundo si era operativo.

Por otro lado es necesario hacer patente la **declaración** del segundo **TESTIGO PROTEGIDO** con clave **PACO**, quien también declara al respecto de cómo el entramado de las autoridades de la Policía Ministerial y de Procuración de Justicia de ese momento año 2007, estaban coludidas con la organización delictiva denominada **LOS ZETAS** o **LA ULTIMA LETRA**, y narra cómo él como jefe de plaza de esta organización criminal llega a corromper a varias cabezas de la Policía Ministerial del Estado y cuanto pagaban porque dejaran trabajar de forma libre a **LOS ZETAS** en el estado de Oaxaca. Por todo lo anterior y conforme se irá narrando en este pliego cosignatario es necesario decir que los hoy **consignados** se unieron para desaparecer forzosamente a estas dos personas y otras que no se cuentan con sus nombres en forma permanente y reiterada, delito considerados como grave en su momento y ahora como de prisión preventiva oficiosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales (vigente en la época de los hechos) y ahora en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Específicamente por la forma de operar los miembros de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, y los sujetos activos que la conforman.

De lo anterior y de las declaraciones antes referidas así como de las investigaciones realizadas en la averiguación previa **PGR/SIEDO/UEITA/204/2010**, se obtuvo la información siguiente: que los **CC. MARIO ALEJANDRO ESTUDILLO SARABIA**, tiene una consignación sin detenido en la averiguación previa **PGR/SIEDO/UEITA/204/2010** Y **ABUID ESTUDILLO ORTÍZ**, (a) **EL ECO 6, EL M2, EL ECO 06**, cuenta con consignación con detenido en la averiguación previa **PGR/SIEDO/UEITA/204/2010**, por Delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y Portación de arma Federal, se encuentra procesado por esa consignación en la causa penal **9/2011**, en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en Jalisco, y se encuentra interno en el CEFERES [REDACTED]

[REDACTED] Tiene registro en una averiguación previa con consignación sin detenido, que es **PGR/SIEDO/UEITA/204/2010**, en la que fue por Violación a la Ley General contra la Delincuencia Organizada y se identificaron dos mandamientos judiciales en la averiguación previa **204/2010/1**, en la Procuraduría General de la República, en el proceso **9/2011** en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en Jalisco [REDACTED]

[REDACTED] se encuentra con antecedentes en la averiguación previa **AP/PGR/BEN/OMAN/551/2010**, Consignado con detenido, por Narcomenudeo, consignado en el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Guanajuato, con un mandamiento judicial en la averiguación previa **2641/1996/1**, Procesos **202/1997**, en el Juez Primero de Distrito en Guadalajara, Jalisco por delito Contra la Salud [REDACTED]

[REDACTED] persona con este nombre quien fue detenido el 13 de febrero del 2008, en Cárdenas, Tabasco relacionada al expediente **AP/609/2008**, por el delito de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Todos ellos



miembros de la entonces Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, y que

Arma de Fuego de las prohibidas por ser exclusivas del Ejército para Abel Estudillo Ortiz.

Ahora bien, como se ha demostrado los ahora indiciados eran **integrantes todos de órganos de autoridad del Estado específicamente de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, y que por sus características particulares y por tener la calidad específica de servidores públicos es que pueden ser considerados probables responsables del delito de DESPARICIÓN FORZADA, y que también fue creado un grupo especial denominado FUERZA POLICIAL DE ALTO RENDIMIENTO (FPAR), formado especialmente para combatir conductas que fueran ligadas a acciones políticas de grupos radicales contra del Gobierno en el Estado de Oaxaca, como lo era la APPO y el EPR (Ejército Popular Revolucionario), y que si en algún momento comprobaban la participación de personas en ello se deshacían de ellos, ya sea asesinandolos, o mandado su asesinato a personas coludidas con la delincuencia organizada, específicamente miembros de los ZETAS, o desapareciéndolos ellos mismos o solicitando el apoyo de la delincuencia organizada para ello. Obteniendo con ello el control del Estado, y de su población, ya que en ese momento estas desapariciones provocaron temor en la población y con ello también temor a realizar declaraciones de testigos sobre lo que estaba pasando.**

Además de que el **poder ostentado por el propio Gobierno de esta forma, provocaba terror en la población para que no siguieran provocando actos de protesta por lo que de esta forma y otras eran reprimidos.**

Dando seguimiento al **inciso c), relacionado a las circunstancias personales de los inculpados,** cabe destacar que al ser **miembros algunos de la estructura de mando de la Procuración de Justicia y de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca y que crearon y formaron un grupo elite perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado para realizar "trabajos especiales de inteligencia, investigación y ejecución de órdenes de todo tipo, específicamente siguiendo la cadena de mando desde el Procurador General y sus comandantes y encargados, siendo éste grupo el denominado (FPAR) FUERZA POLICIAL DE ALTO RENDIMIENTO. Por lo anterior, queda demostrado que los sujetos activos son altamente peligrosos.**

En cuanto al **inciso d) circunstancias que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso,** en ese aspecto resulta relevante el hecho de que algunos de los inculpados fueron y otros aún son servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, y si se toma en cuenta que desde el inicio de la presente investigación existió una negativa a proporcionar información y un ocultamiento de la misma, así como la desaparición de un testigo clave que pese a ser ordenes de Procurador que se internara en el área de separos a las víctimas, éste se negó al no habersele presentado la